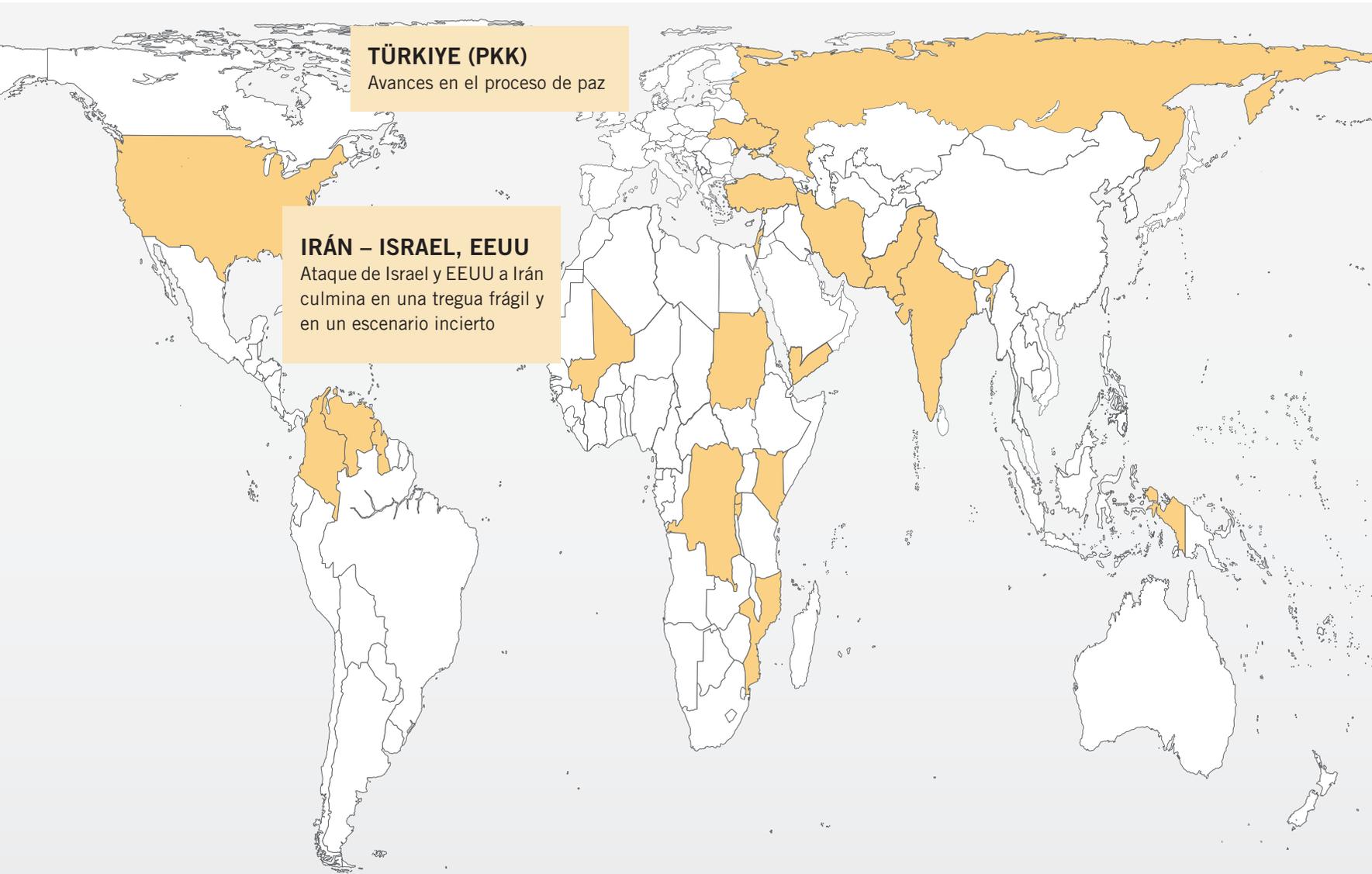


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Julio de 2025

êĉp̂ escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona



Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Burundi
Kenya
Malí
Mozambique
RDC – Rwanda
Sudán

AMÉRICA

Colombia
Venezuela – Guyana

ASIA Y EL PACÍFICO

India – Pakistán
Indonesia (Papúa Occidental)

EUROPA

Rusia – Ucrania

ORIENTE MEDIO

Israel – Palestina
Yemen

Con el apoyo de:

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament

Generalitat
de Catalunya

- *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación trimestral
- que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la
- agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de
- oportunidad para la construcción de paz. Este número abarca el periodo
- entre abril y el 7 de julio de 2025

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre abril y el 7 de julio de 2025.

Casos destacados:

IRÁN – ISRAEL, EEUU: Ataque de Israel y EEUU a Irán culmina en una tregua frágil y en un escenario incierto

TÜRKIYE (PKK): Avances en el proceso de paz

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

BURUNDI: El gubernamental CNDD-FDD gana las elecciones legislativas en medio de una escalada de la violencia e impactos del cambio climático

KENYA: Mueren decenas de personas en las protestas para conmemorar el aniversario de las movilizaciones de 2024

MALÍ: La Junta Militar consolida su poder en medio del continuo deterioro de la situación de seguridad en el país

MOZAMBIQUE: Avances en el proceso de diálogo nacional mientras persiste la violencia en Cabo Delgado

RDC – RWANDA: Acuerdo de paz mediado por EEUU y Qatar

SUDÁN: Actores de la comunidad internacional tratan de reavivar las iniciativas de diálogo de paz

AMÉRICA

COLOMBIA: Comuneros del Sur hace entrega de armamento al Gobierno mientras aumenta la violencia política en el país

VENEZUELA – GUYANA: Se incrementa la tensión bilateral por la elección de representantes de la Guayana Esequiba en los comicios parlamentarios en Venezuela

ASIA Y EL PACÍFICO

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países se sitúan al borde de un conflicto armado a gran escala

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Se incrementa la violencia por parte del Ejército y el grupo armado OPM

EUROPA

RUSIA – UCRANIA: Moscú intensifica su ofensiva militar

ORIENTE MEDIO

ISRAEL – PALESTINA: Nuevas perspectivas de alto el fuego en Gaza, mientras se agravan crímenes de Israel en la Franja

YEMEN: Reapertura de carreteras clave tras años de bloqueo en las negociaciones



El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró la urgencia de soluciones diplomáticas y no militares a la crisis entre Irán, Israel y EEUU. Fuente: UN Photo / Manuel Elías

IRÁN – ISRAEL, EEUU

Ataque de Israel y EEUU a Irán culmina en una tregua frágil y en un escenario incierto

La decisión de Israel de lanzar un ataque masivo contra Irán el 13 de junio, secundado días después por EEUU, abre un episodio de confrontación sin precedentes en Oriente Medio. Las hostilidades, que fueron bautizadas a nivel mediático como la “guerra de los 12 días”, desembocaron a finales de junio en una tregua frágil y en un escenario pleno de incertidumbres. Además de las incógnitas y elementos de riesgo que persisten –y que amenazan con derivar en más inestabilidad y nuevos enfrentamientos armados en la región–, la ofensiva israelí-estadounidense volvió a poner en evidencia las vulneraciones a las normas del derecho internacional y la peligrosa normalización del uso de la fuerza en el sistema global. Supuestamente, la acción israelí pretendía destruir el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán bajo el argumento de que la república islámica estaba *ad portas* de conseguir el arma nuclear. Pero Israel no ofreció evidencias al respecto y tampoco hubo ninguna provocación o acción iraní que justificara su ofensiva, por lo que su intento por presentarla como un ataque preventivo recibió innumerables críticas. **Voces expertas de la ONU insistieron en que los ataques israelíes constituirían una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas**, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza apelando a una autodefensa preventiva ante supuestas amenazas de proliferación nuclear o terrorismo. La Organización

Internacional para la Energía Atómica (OIEA) también subrayó que las acciones militares contra instalaciones atómicas entrañaban riesgos inaceptables para la seguridad regional e internacional, además de exponer a consecuencias catastróficas a nivel medioambiental. Las Convenciones de Ginebra también prohíben los ataques contra instalaciones nucleares. Pese a estos argumentos y a los públicos cuestionamientos a la estrategia de Israel, EEUU se sumó activamente a su ofensiva, también de manera ilegal, sin apelar a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y sin someter tampoco su iniciativa armada a una validación por el Congreso estadounidense. Las acciones de Israel y EEUU motivaron expresiones de alarma de, entre otros, **el secretario general de la ONU, que alertó sobre las consecuencias en la paz y seguridad internacionales y reiteró la urgencia de apostar por soluciones diplomáticas y no militares**. Sin embargo, al menos a corto plazo, las perspectivas de la diplomacia nuclear parecían severamente afectadas a causa de las hostilidades.

La guerra de los 12 días

La acción israelí iniciada el 13 de junio contra la república islámica involucró una agresiva campaña aérea que tuvo

como principales objetivos las instalaciones nucleares, la infraestructura balística, y numerosos altos cargos militares y científicos iraníes involucrados en el programa atómico. Israel lanzó más de 360 ataques en todo el país –27 provincias iraníes se vieron afectadas– y alcanzó con especial virulencia la capital, Teherán, obligando a decenas de miles de personas a huir de la ciudad. La campaña del Gobierno de Netanyahu, bautizada por Israel como *Rising Lion* (León Creciente), también tuvo entre sus objetivos infraestructura energética, diversos ministerios y edificios gubernamentales, la agencia de radiotelevisión pública y la prisión de Evin, en la que permanecen detenidas numerosas figuras de la disidencia política iraní. Israel quiso presentar el ataque a este centro penitenciario como una denuncia a un “símbolo de la tiranía del régimen”, pero la mayor parte de las 70 personas fallecidas en el ataque israelí a la cárcel de Evin fueron funcionarios, personas encarceladas y familiares que se encontraban de visita. Algunos balances apuntan a más de 900 muertes en Irán en este período. Según ACLED, más de 1.100 personas murieron a causa de los ataques israelíes, de las cuales al menos un 40% eran civiles, mientras que otras miles resultaron heridas. Irán respondió a la ofensiva israelí con el lanzamiento de más de un millar de drones y misiles contra Israel, en el marco de una operación que denominó *True Promise III* (Promesa Verdadera III). Si bien se estima que entre 80% y 90% de estos ataques fueron interceptados por los sistemas de defensa israelí, al menos 36 misiles golpearon Israel y provocaron la muerte de al menos 28 personas (en su mayoría civiles) y heridas a otras 3.000.

Tras 12 días de confrontación, el alto el fuego se percibe como volátil, en parte por la falta de un plan político para abordar el conflicto de fondo

El 19 de junio Donald Trump anunció que EEUU estaba valorando su implicación en la contienda y que se daba un plazo de dos semanas para tomar la decisión. Para entonces, los preparativos de la acción militar ya estaban en marcha. El 22 de junio Washington emprendió una serie de ataques contra las instalaciones nucleares iraníes de Isfahan, Natanz y Fordow. En esta última, construida a gran profundidad y que supuestamente albergaba la mayor parte de las reservas de uranio enriquecido iraníes, EEUU utilizó bombas de gran magnitud. Teherán advirtió que respondería a la ofensiva de Washington y, el 23 de junio, lanzó un anunciado ataque con misiles contra la base estadounidense de al-Udeid, en Qatar, que fue ampliamente interceptado por las fuerzas qataríes y estadounidenses. Tras estos intercambios, el 24 de junio Trump anunció un alto el fuego “completo y total” entre Israel e Irán. Los enfrentamientos entre Israel e Irán continuaron durante unas horas, pero la tregua acabó entrando en vigor en medio de reivindicaciones de “victoria histórica”, tanto de Netanyahu como del presidente iraní. La situación, sin embargo, sigue siendo inestable y la tregua se percibe como altamente volátil. En parte, por la falta de un plan político para garantizar el mantenimiento del alto el fuego y para abordar el conflicto de fondo entre Irán -Israel, EEUU.

Futuro incierto

La ofensiva israelí contra la república islámica dinamitó las negociaciones en curso en torno al programa nuclear iraní, dos días antes de la celebración de una nueva ronda de contactos diplomáticos que estaba prevista para el 15 de junio en Qatar. A principios de 2025 se habían puesto en marcha conversaciones entre EEUU e Irán con la mediación qatarí. Este diálogo se daba en un **trasfondo de progresivo deterioro en la implementación del acuerdo en torno al programa nuclear iraní** –Plan de Acción Integral Conjunto, JCPOA, por sus siglas en inglés– suscrito en 2015 por EEUU, Irán, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania. La puesta en marcha del acuerdo se había visto afectada en 2018 por la decisión de Donald Trump durante su primer mandato –alentada por el Gobierno israelí de Netanyahu– de retirar a EEUU del acuerdo alcanzado por su predecesor, Barack Obama, y reinstalar sanciones contra Irán, en el marco de su estrategia de “máxima presión” a la república islámica. Desde entonces, Irán se había distanciado progresivamente del cumplimiento de sus obligaciones según el pacto y los inspectores del OIEA habían constatado, entre otras cosas, mayores niveles de enriquecimiento de uranio –hasta un 60%– muy por sobre de los establecidos en el acuerdo. El 12 de junio, la junta del OIEA aprobó una moción de censura contra Irán por sus actividades nucleares, por primera vez en 20 años, por vulnerar sus obligaciones en el marco del Tratado de No Proliferación nuclear. Pese a ello, no se habían verificado acciones de Irán para dar el paso –indispensable para conseguir armas nucleares– de *weaponization* o militarización de sus capacidades nucleares (a través de la miniaturización y acoplamiento del material atómico en su sistema de misiles). La propia CIA y el OIEA habían confirmado que no había indicios de que Irán hubiera activado un plan para desarrollar armas nucleares. Cabe destacar que mientras Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y se ha sometido a inspecciones del OIEA, Israel no es suscriptor de este tratado y, aunque no lo reconoce públicamente, es ampliamente asumida su posesión de arsenales nucleares.

Tras la suspensión de las hostilidades de la “guerra de los 12 días” persistían una serie de incógnitas. Una de ellas es la extensión real del daño al programa nuclear iraní. Aunque Trump se vanaglorió de haber “obliterado total y completamente” el programa atómico de la república islámica, ya a finales de junio se evidenciaron dudas y especulaciones sobre el nivel de afectación en las instalaciones atacadas y, de manera especial, sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido de Irán, que podrían haber sido trasladadas y ocultadas por Teherán antes de la ofensiva. A finales de junio, el director del OIEA admitió que no había claridad sobre el paradero de unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% por la república islámica y aseguró que pese a los severos daños infligidos a sus instalaciones, **Irán podía reactivar sus**

actividades nucleares en un plazo de meses. A pesar de la muerte de numerosos científicos iraníes en los ataques de Israel, la república islámica ha alcanzado un amplio conocimiento del ciclo nuclear y eso no parece reversible. Este diagnóstico coincide con el de fuentes de la propia inteligencia estadounidense que constataron que pese al significativo daño provocado por la acción militar, la ofensiva solo habría ralentizado –no eliminado– el programa atómico iraní. La posibilidad de una reanudación de los ataques y/o de una nueva confrontación armada, por tanto, seguía abierta. Washington ha advertido que retomaría sus acciones militares si Irán decide volver a poner en marcha su programa de enriquecimiento de uranio. Teherán, en tanto, ha continuado reivindicando su derecho a desarrollar un programa nuclear y, a finales de junio, decidió suspender su cooperación con el OIEA. La república islámica no desea un escrutinio de inspectores de la agencia a sus actividades nucleares y ha lanzado duras críticas al director del OIEA. Analistas sugieren que **a Irán le interesa mantener la ambigüedad sobre sus actividades nucleares**, mientras que Trump insiste en su narrativa de una victoria sin ambages, para alimentar la idea de infalibilidad de su Gobierno y porque una lectura diferente obligaría a EEUU a plantearse una nueva intervención militar de contornos inciertos en Oriente Medio.

El ataque de EEUU es percibido por analistas como un punto de no retorno, que afectará de manera decisiva las perspectivas de una negociación sobre el programa nuclear iraní

Más allá de los impactos inmediatos del ataque israelí-estadounidense sobre Irán y el nivel de destrucción física de sus capacidades atómicas, las hostilidades también repercutirán en las perspectivas de negociación nuclear. Algunos analistas han destacado que la ofensiva de EEUU supone un **punto de no retorno, al alterar las bases sobre las cuales se ha construido la arquitectura de no proliferación nuclear respecto a Irán y alentar las posibilidades de que la república islámica persiga la adquisición de un arma atómica**. En esta línea se ha pronunciado, Enrique Mora, negociador de la UE sobre el dossier nuclear iraní hasta principios de 2025, subrayando que aunque Irán no abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear, la ofensiva previsiblemente afectará de manera determinante su voluntad política de aceptar las inspecciones a sus instalaciones nucleares. Más aún, el ataque lanzado por Trump confirmaría que la diplomacia nuclear es reversible y vulnerable a los cambios de gobierno en Washington y podría alentar a Teherán hacia la consecución de armas atómicas bajo una lógica estratégica: evitar nuevos bombardeos al país. Otras voces subrayan, sin embargo, que **el liderazgo iraní está lejos de ser monolítico y apuntan a que en el nuevo contexto algunas voces podrían apostar por una vía pragmática e insistir en que la vía de la diplomacia es la única alternativa para conseguir una cierta estabilidad**. En declaraciones a principios de julio, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se mostró dispuesto a una **vía dialogada con EEUU para abordar la crisis**. Lo que sí parece

claro es que, difícilmente, Irán aceptará las condiciones que pretende imponer Washington y que supondrían un abandono total de sus actividades atómicas, incluso para fines civiles.

A estas perspectivas se suma el incierto accionar de Israel, teniendo en cuenta sus posiciones maximalistas y que el propósito de Netanyahu en su ofensiva contra la república islámica parece trascender el objetivo del programa nuclear. El propio primer ministro israelí ha admitido su ambición de redibujar el mapa de Oriente Medio y desde Israel se han hecho explícitas las aspiraciones de cambio de régimen en Irán a través de apelaciones a la población iraní para que se levante contra sus autoridades. El Gobierno israelí podría intentar avanzar su agenda e intentar consagrar una posición de fuerza y dominio estratégico en la región, aprovechando el contexto internacional favorable a sus intereses, dado el marco de impunidad ante sus acciones –en particular el genocidio en Gaza–, el momento de vulnerabilidad de Teherán y el debilitamiento de múltiples actores regionales de su órbita de influencia –Hamas, Hezbollah, el Gobierno de Bashar al-Assad en Siria–, en buena parte como resultado de las acciones militares israelíes en los últimos meses. Respecto al futuro del régimen iraní, al menos en lo inmediato, no se han identificado protestas contra las autoridades. Las movilizaciones populares han rendido homenaje a las víctimas de los ataques israelíes. En paralelo, el Gobierno ha intensificado la represión y castigos contra los presuntos colaboradores con Israel.

En este escenario crítico, Europa ha vuelto a quedar en evidencia como un actor dividido y dubitativo a la hora de posicionarse como un actor internacional relevante. Tras la retirada de EEUU del JCPOA, los tres países europeos suscriptores del pacto se habían mantenido como principales interlocutores en las negociaciones con la república islámica. Sin embargo, los países del llamado E3 –Reino Unido, Francia y Alemania– apenas habían tenido información o margen de influencia en los contactos establecidos en 2025 entre Irán y EEUU, liderados por la parte estadounidense por el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff. Además, según informaciones de prensa, Europa fue alertada con apenas horas de antelación de los ataques de Israel y EEUU contra Irán. La reunión del E3 y representantes iraníes en Ginebra en plena crisis, el 20 de junio, no ofreció resultados, mientras se evidenciaba la diversidad de posturas ante la ofensiva militar israelí y los dobles raseros a la hora de defender la legalidad internacional. Francia calificó abiertamente el ataque como ilegal, Reino Unido optó por una respuesta ambigua y Alemania lo apoyó de manera contundente en boca de su primer ministro, quien aseguró que **“Israel estaba haciendo el trabajo sucio en nombre de todos”**.

Avances en el proceso de paz

El proceso de paz iniciado en 2024 entre Türkiye y el grupo armado kurdo PKK continúa avanzando, con el inicio del desarme por parte del PKK y con preparativos para la creación de una comisión parlamentaria que supervise la evolución del proceso de paz y aborde cuestiones relativas a este. El líder del PKK, Abdullah Öcalan –en prisión desde 1999– señaló que el proceso de paz entraba en una nueva fase. Así lo comunicó la delegación del partido prokurdo DEM –actor político con un papel de intermediación en el proceso de diálogo–, tras una **nueva reunión** el 6 de julio con el líder del PKK, la sexta en lo que va de proceso. A la reunión entre la delegación y Öcalan le siguió una reunión entre la delegación y el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el 7 de julio, la segunda desde el encuentro mantenido el 10 de abril –que había sido el primer encuentro entre Erdogan y un partido prokurdo en una década. En la reunión con Erdogan asistieron también el vicepresidente del AKP y el director de los servicios de inteligencia (MIT). Según el DEM, durante la reunión se subrayó la **voluntad mutua** de avanzar en el proceso. Al cierre de esta publicación (7/07/2025) estaba prevista un acto de inicio del desarme **el 11 de julio** en la provincia de Suleimaniya (norte de Iraq), **presentada como gesto de buena voluntad** y que incluye destrucción de armas por varias decenas de combatientes del PKK. La planificación del acto se reajustó días antes **por motivos de seguridad**. Se preveía la participación de varias decenas de participantes de Turquía e internacionales, de ámbito político y de la sociedad civil. Previamente al inicio del desarme, el jefe de la inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, mantuvo reuniones con diversos altos cargos de la **Administración kurda del norte de Iraq**, cuyo gobierno y líderes políticos desempeñan un papel de apoyo al proceso de paz, incluyendo a la fase del desarme. Estaban previstas reuniones también de Kalin con altos cargos en **Bagdad sobre cuestiones relativas a la logística del desarme**. Se preveía la supervisión del desarme por parte de autoridades de Türkiye, del Gobierno de la Región del Kurdistán (KRG, norte de Iraq) y de Iraq. El liderazgo del PKK había advertido a principios de julio sobre **obstáculos al proceso de disolución** del grupo por parte de algunos sectores del Gobierno.

El inicio del desarme sigue al histórico anuncio del PKK de finalización de la lucha armada y disolución de la organización. La decisión fue tomada en su 12º congreso, celebrado entre el 5 y 7 de mayo, y fue **anunciada el 12 de mayo**. Previamente, el 1 de marzo el PKK ya había anunciado un alto el fuego unilateral y respaldado en su totalidad el llamamiento de Öcalan del 27 de febrero de 2025 en que llamaba al grupo armado a convocar un congreso, deponer las armas y disolverse, en el marco de

una visión de solución basada en la paz, una sociedad democrática y apertura del espacio político.

Otro paso relevante en el actual proceso de paz son los preparativos en marcha encaminados al establecimiento de una comisión en el Parlamento de Türkiye que pueda abordar el proceso de paz y en la que participen representantes de los diferentes partidos políticos. En los últimos meses y semanas recientes se incrementaron las discusiones al respecto. Entre otros pasos, **el presidente del Parlamento, Numan Kurtulmus se reunió** el 24 de junio con representantes de seis partidos políticos, incluyendo el gubernamental AKP, su socio ultranacionalista MHP, el principal partido opositor CHP y el prokurdo DEM, para abordar cuestiones como la estructura, base legal y calendario de la futura comisión. El partido prokurdo DEM ha defendido en estos últimos meses que la comisión se establezca antes del receso parlamentario de verano. A finales de junio trascendió que el Parlamento **retrasaba el inicio de su periodo de pausa**, por los preparativos para la creación de la comisión. Desde el inicio del proceso, actores como el líder del PKK, el partido prokurdo DEM y el principal partido opositor, CHP, han llamado a otorgar al Parlamento un papel relevante en el proceso de diálogo. Se espera la aprobación de la comisión con amplio apoyo político.

El inicio del desarme sigue al histórico anuncio del PKK de finalización de la lucha armada y disolución de la organización

Oportunidad histórica

El proceso de diálogo comenzó a **desplegarse en la esfera pública en octubre de 2024** y en **meses siguientes** se fueron produciendo diversos pasos. Los nuevos pasos, incluyendo la histórica decisión del PKK, consolidan el proceso y ponen de manifiesto la existencia de una histórica oportunidad de paz para la cuestión kurda, no exenta de riesgos, como recoge el **informe Alerta 2025**. Continúan interrogantes relativos al alcance y abordaje de demandas históricas relativas a la cuestión kurda, como son derechos lingüísticos y culturales, garantías de participación política y descentralización, así como incertidumbre relacionada con las dinámicas de represión interna incluyendo **contra el principal partido opositor, CHP**. Está por ver también como se continuará desplegando el desarme y cómo se abordará y materializará una eventual reintegración de los combatientes del PKK y resolverá la situación de los miembros del PKK en prisión. Actores diferentes continúan usando lenguajes y énfasis diferentes con relación al proceso (referido como “Türkiye sin terrorismo”, por la coalición gubernamental, frente a “proceso de paz y sociedad democrática” por el PKK). En relación a la liberación de personas presas, el Gobierno

aprobó a principios de junio un **paquete de reforma judicial** (“10° paquete de reformas”) que introduce cambios en la elegibilidad a la libertad condicional, ejecución de sentencias y condiciones de prisión. No obstante, la reforma fue **criticada por el partido prokurdo DEM** y el movimiento kurdo por dejar fuera a quienes están condenados bajo la ley antiterrorista, y con ello a miles de activistas y políticos kurdos. Históricamente, organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han denunciado la vaguedad de los cargos bajo dicha ley y su uso para reprimir libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Representantes del DEM señalaron que el Ministerio de Justicia anunció la aprobación de un **11° y un 12° paquete de reformas judiciales** en octubre, que esperaban abarcara a otros presos, a quienes dejen las armas, a personas en el exilio y otras personas afectadas por el conflicto. Existe también

preocupación por la **falta de transparencia del proceso y llamamientos** a construcción de memoria histórica, rendición de cuentas, reparación y reconciliación.

Pese a los interrogantes y diferentes enfoques, el proceso continúa aglutinando apoyo de sus principales actores protagonistas y respaldo político y social. Según una encuesta de mayo publicada en junio por el centro de investigación Rawest, casi **dos tercios de la población** en Türkiye da apoyo al proceso de paz, un incremento respecto al 45% en junio. Entre población de origen kurdo, el apoyo se eleva hasta el 80%. No obstante, la encuesta también señala percepciones de fragilidad del proceso. Actores del movimiento kurdo, organizaciones de derechos humanos y de construcción de paz continúan movilizadas en apoyo a la construcción de memoria y diálogo, incluyendo entre **familiares de soldados y del PKK**.

ÁFRICA

BURUNDI: El gubernamental CNDD-FDD gana las elecciones legislativas en medio de una escalada de la violencia e impactos del cambio climático

KENYA: Mueren decenas de personas en las protestas para conmemorar el aniversario de las movilizaciones de 2024

MALÍ: La Junta Militar consolida su poder en medio del continuo deterioro de la situación de seguridad en el país

MOZAMBIQUE: Avances en el proceso de diálogo nacional mientras persiste la violencia en Cabo Delgado

RDC – RWANDA: Acuerdo de paz mediado por EEUU y Qatar

SUDÁN: Actores de la comunidad internacional tratan de reavivar las iniciativas de diálogo de paz

BURUNDI

El gubernamental CNDD-FDD gana las elecciones legislativas en medio de una escalada de la violencia e impactos del cambio climático

El partido que ostenta el poder en el país, el **CNDD-FDD**, **consigue una victoria** del 96,5% de los votos en las elecciones legislativas celebradas el 5 de junio, obteniendo todos los escaños del Parlamento, en medio de una campaña marcada por la represión de la oposición y la reducción del espacio político. A su vez, la oposición ha calificado el proceso electoral de fraudulento y observadores han denunciado numerosas irregularidades. No obstante, el 20 de junio el **Tribunal Constitucional ratificó los resultados** y rechazó las alegaciones presentadas por los partidos opositores, dejando fuera del Parlamento la presencia de la oposición política. Miembros del Congreso Nacional por la Libertad (CNL), el principal partido opositor que desde 2023 se encuentra suspendido por irregularidades, y al que se le prohibió presentarse, denunció votaciones múltiples y forzadas, así como “impedimentos de acceso” y “encarcelamientos arbitrarios” de sus observadores. En 2024 el líder histórico

del CNL, Agathon Rwasa –antiguo líder de la rebelión hutu durante la guerra civil que asoló el país entre 1993 y 2025 que causó más de 300.000 víctimas mortales– fue relegado en el liderazgo del CNL por Nestor Girukwishaka, próximo al CNDD-FDD, según diversos análisis, lo que dividió al partido. Rwasa, liderando la nueva coalición Burundi Bwa Bose, anunció el boicot electoral dado el clima de persecución de la oposición, las acciones y amenazas de las juventudes del CNDD-FDD, las milicias Imbonerakure, contra los simpatizantes y miembros de los diferentes partidos opositores.

Representantes de partidos opositores Congreso de Patriotas y UPRONA, entre otros, denunciaron numerosas irregularidades. Analistas desde el anonimato señalaron que el país se enfrenta a una profunda crisis socioeconómica, caracterizada por diversos tipos de escasez, una inflación de más del 40% mensual y un creciente descontento público. El país lleva casi tres años paralizado, en particular, por una grave escasez de gasolina.

En paralelo, en los últimos meses el Ejército ha llevado a cabo importantes operaciones militares contra el grupo

armado Frente de Liberación Nacional (FLN) cerca de la frontera con Rwanda. **SOS Medias Burundi en mayo**, informó que el Ejército llevó a cabo dos ofensivas contra el FLN, en Kibira, provincia de Cibitoke, cerca de la frontera con Rwanda, en las que el Ejército ha afirmado haber matado a más de 100 combatientes del FLN y perdido a 10 soldados. Las autoridades afirmaron que las operaciones contra el FLN, que se negó a integrarse en los contingentes burundeses desplegados en el este de la República Democrática del Congo (RDC) para combatir al M23, formaban parte de un esfuerzo más amplio para estabilizar la frontera.

Por otra parte, cabe destacar que **el cambio climático está provocando graves y periódicas inundaciones** en las inmediaciones del lago Tanganika, desplazando miles de personas, propagando enfermedades como el cólera y dejando un déficit de ayuda urgente en uno de los países más pobres y vulnerables del mundo. El lago Tanganika es conocido por sus fluctuaciones cíclicas en el nivel del agua, pero estas se han visto agravadas por el calentamiento global, según Bernard Sindayihebura, especialista en planificación urbana y medio ambiente de la Universidad de Burundi. Las temperaturas superficiales del segundo lago más grande de África han aumentado de forma constante, lo que ha provocado lluvias más intensas y ha elevado las aguas del lago por encima de su promedio histórico desde 2018. Con el lago crecido, el río Ruzizi no puede desembocar en él, lo que provoca inundaciones persistentes que inundan zonas circundantes como Gatumba, en la costa norte. Esta situación se agravó en 2023. En 2024, las lluvias torrenciales, agravadas por el fenómeno de El Niño, desplazaron a casi 100.000 personas y se cobraron numerosas vidas, aunque no se han publicado cifras oficiales. Los casos de cólera se han disparado. Burundi se encuentra entre los países más pobres del mundo, ocupando el puesto 187 de 193 en el IDH. La ONU también lo incluye entre los 20 países más vulnerables al cambio climático. Bajo la presidencia de Donald Trump, el 83% de los proyectos humanitarios de EEUU se han suspendido, y los programas relacionados con el clima se encuentran entre los que corren mayor riesgo. Anteriormente, EEUU proporcionaba el 40% de la ayuda que recibía el país, y ningún otro país ha contribuido a cubrir la brecha.

KENYA

Mueren decenas de personas en las protestas para conmemorar el aniversario de las movilizaciones de 2024

La organización de derechos humanos **Amnistía Internacional** ha informado que al menos 16 personas murieron y otras 400 resultaron heridas en las manifestaciones el 25 de junio en conmemoración de las movilizaciones de 2024 contra el controvertido proyecto fiscal del Gobierno. La Kenyan National Commission

on Human Rights confirmó la muerte de 19 personas por armas de fuego, y alrededor de 500 heridos entre los manifestantes y policía, así como seis incidentes de violencia sexual. El ministro de Interior, Kipchumba Murkomen, acusó a los manifestantes de intentar un golpe de Estado. A estas declaraciones se ha sumado un clima de indignación como consecuencia de otras supuestas declaraciones del ministro, en las que hacía un **llamamiento a los cuerpos de seguridad a disparar a matar** a los manifestantes. Aunque Murkomen ha desmentido haber realizado estas declaraciones, numerosas voces de partidos políticos y antiguos altos cargos gubernamentales han lamentado sus palabras y las han calificado de peligrosas. Las autoridades kenianas no han revelado el número de víctimas. Los informes de los medios de comunicación y de grupos de derechos humanos varían, situando el número de muertos entre ocho y 19.

Miles de personas salieron a las calles en Nairobi, Mombasa, Kisii y otras importantes ciudades de Kenya la madrugada del 25 de junio para conmemorar el aniversario de las violentas protestas contra una ley que pretendía una importante subida de impuestos en 2024, cuando la policía abrió fuego contra un gran número de manifestantes, dando muerte a al menos 60 manifestantes el 25 de junio del año pasado. Los bancos y las escuelas del distrito financiero central de Nairobi cerraron en previsión de las protestas, y la policía había acordonado la Casa del Estado, así como el edificio del Parlamento, con varias capas de alambre de púas. El año pasado, los manifestantes irrumpieron en el bloque del Parlamento, expulsando a políticos e incendiando partes del edificio. Este es el último brote de violencia en este país del este de África, donde jóvenes manifestantes han salido a las calles con frecuencia en los últimos meses para protestar contra una multitud de problemas, como la brutalidad policial, la corrupción gubernamental y los altos impuestos.

La marcha del 25 de junio fue mayoritariamente pacífica al principio, y mucho más reducida en comparación con las protestas del año pasado. Sin embargo, la violencia en Nairobi se intensificó posteriormente, después de que hombres que se cree eran agentes de seguridad encubiertos y armados con látigos y porras, atacaran a los manifestantes. La policía también utilizó fuego real, balas de goma, cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Tiendas y negocios en el centro de Nairobi también fueron atacados, saqueados e incendiados por grupos no identificados entre los manifestantes. Algunos manifestantes también quemaron barricadas en la ciudad y agredieron físicamente a presuntos agentes vestidos de civil. En la ciudad de Kikuyu, a unos 20 km de Nairobi, los manifestantes irrumpieron e incendiaron edificios del gobierno local, incluyendo una comisaría y un tribunal. Algunos fueron arrestados por la policía, pero no han sido identificados. En otras ciudades, como Mombasa, las marchas se mantuvieron pacíficas. También se reportaron enfrentamientos en las localidades de Matuu y Mlolongo,

en el este del condado de Machakos, a unos 100 km de la capital. También se reportaron hechos de violencia en Karatina, condado de Nyeri.

MALÍ

La Junta Militar consolida su poder en medio del continuo deterioro de la situación de seguridad en el país

Durante el segundo trimestre de 2025, el régimen del coronel Assimi Goïta –quien asumió el poder tras los golpes de Estado de 2020 y 2021– avanzó significativamente en la consolidación de la Junta Militar, socavando lo que quedaba del sistema multipartidista maliense y ampliando su permanencia en el poder hasta al menos 2030. El 29 de abril, una asamblea nacional impulsada por la Junta y boicoteada por la oposición **recomendó nombrar a Goïta como presidente con un mandato renovable de cinco años y disolver todos los partidos políticos**. El 13 de mayo, Goïta formalizó la disolución de todos los partidos políticos, consolidando la concentración del poder, y el 11 de junio, el gabinete aprobó un proyecto de ley para extender la transición militar por otros cinco años, legalizando la continuidad de Goïta hasta 2030.

Paralelamente, y pese a que la principal justificación del régimen militar fue mejorar la seguridad, **la crisis de seguridad se mantuvo y los ataques yihadistas siguieron aumentando en frecuencia, letalidad y alcance geográfico entre abril y junio**. Entre los eventos más destacados del trimestre, el 1 de abril, Argelia derribó un dron militar maliense que supuestamente violó su espacio aéreo, provocando una grave crisis diplomática. Bamako denunció un “acto de agresión” y acusó a Argel de apoyar el “terrorismo” en el norte. El evento provocó la suspensión de la cooperación militar regional, la retirada de sus embajadores y el cierre del espacio aéreo. El 23 de mayo, el grupo yihadista JNIM (afiliado a al-Qaeda) atacó la base militar de Dioura (Mopti), matando a 41 soldados. El mes de junio fue el más letal y preocupante del trimestre. Entre el 1 y el 5 de junio, el JNIM mató a más de 150 soldados en ataques coordinados en Mopti y Tombuctú y, el 1 de junio, capturaron la base de Boulikessi, matando al menos a 100 militares. A su vez, el Estado Islámico en la provincia del Sahel atacó el 4 de junio la base de Tessit (Gao), matando a 94 personas, incluidos más de 40 soldados.

Por otro lado, el grupo paramilitar ruso Wagner, que desde 2021 había mantenido una presencia activa en Malí con hasta 2.000 combatientes desplegados en apoyo del Ejército, **anunció el 6 de junio su retirada definitiva**, alegando que su “misión se había completado”. A pesar del anuncio de Wagner, Rusia seguirá teniendo presencia en el país a través del Cuerpo de África (Africa Corps), una fuerza paramilitar bajo el mando directo del Ministerio de Defensa ruso que se puso en marcha tras la desavenencias y muerte del líder del grupo Wagner,

Yevgeny Prigozhin, en 2023, después de montar una breve rebelión armada en Rusia que desafió el Gobierno del presidente Vladimir Putin. El anuncio de la retirada de Wagner se produjo un poco antes de que el líder de la Junta Militar, Goïta, viajase a Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin **para examinar las relaciones bilaterales**, logrando la firma de diferentes acuerdos para desarrollar infraestructura nuclear civil (una planta de baja potencia), ampliar los intercambios comerciales y consolidar la cooperación militar.

MOZAMBIQUE

Avances en el proceso de diálogo nacional mientras persiste la violencia en Cabo Delgado

Como respuesta a las protestas postelectorales que estallaron tras las elecciones de octubre de 2024, que dejaron cientos de personas muertas, Mozambique está atravesando una profunda crisis política. Desde su investidura en enero de 2025, el nuevo presidente Daniel Chapo se ha comprometido a poner en marcha un proceso de reformas. El 2 de abril, el Parlamento **aprobó por unanimidad la Ley de Diálogo Nacional**, promulgada por el nuevo presidente Chapo el 14 del mismo mes. **Este instrumento legal** establece la creación de una comisión nacional de diálogo y reforma, la revisión de la Constitución, así como el establecimiento de medidas de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, una de las principales controversias del proceso reside en el formato de constitución de la comisión nacional, compuesto por **21 miembros, de los cuales 18 provienen de los partidos políticos con representación** en los diferentes niveles –nacional, provincial y municipal, dos miembros por partido– y tres representantes de la sociedad civil. A este respecto, a finales de mayo, organizaciones de sociedad civil denunciaron falta de transparencia en la selección de representantes para la comisión técnica del diálogo, cuestionando que no se hayan publicado los nombres de los tres representantes de la sociedad civil ni los criterios de selección, alimentando la desconfianza pública. Asimismo, el formato de representación deja fuera de la comisión del diálogo nacional al principal líder opositor Venâncio Mondlane, debido a que su partido no tiene representación parlamentaria. Esta omisión es percibida como un obstáculo serio a la legitimidad del proceso, lo que puede deslegitimar los resultados del diálogo y profundizar el malestar social.

Paralelamente, y en relación a la situación de violencia en la provincia de Cabo Delgado –epicentro del conflicto armado en el norte de Mozambique desde 2017–, **entre abril y junio se registró una intensificación de las operaciones del Estado Islámico de la Provincia de Mozambique (ISMP)**. Tras el repliegue de la insurgencia debido a la ofensiva conjunta lanzada por fuerzas ruandesas y mozambiqueñas en 2024, en el segundo trimestre del año se intensificaron los enfrentamientos armados en la región entre el ISMP y las fuerzas de seguridad mozambiqueñas

y sus aliados ruandeses. Medios locales subrayaron que las acciones insurgentes han adoptado un patrón que busca el reagrupamiento, la expansión territorial y nuevas vías de financiación. El mes de mayo marcó un aumento sustancial de la capacidad ofensiva del ISMP, incluyendo operaciones en la provincia de Niassa, al suroeste de Cabo Delgado, lo cual representa su mayor incursión en esa zona desde 2021. En respuesta, el Gobierno mozambiqueño estableció un Centro Antiterrorista bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y publicó una nueva estrategia antiterrorista, orientada tanto a la acción militar como al abordaje de agravios socioeconómicos que alimentan el conflicto. Por otro lado, el 20 de mayo, la compañía TotalEnergies **anunció que buscaría aprobación para reanudar su proyecto de gas natural licuado (GNL) en Cabo Delgado**, suspendido desde el ataque insurgente de 2021 en Palma.

RDC – RWANDA

Acuerdo de paz mediado por EEUU y Qatar

Entre abril y junio de 2025, la República Democrática del Congo (RDC) y Rwanda han protagonizado un proceso diplomático con la mediación de EEUU y Qatar para intentar poner fin al prolongado conflicto en el este de la RDC, marcado por la ofensiva del grupo rebelde M23, apoyado por Kigali según informes de la ONU, EEUU y la UE. Este proceso diplomático ha culminado con la firma de un acuerdo de paz el 27 de junio. Aunque se han acordado al menos seis treguas desde 2021, todas ellas colapsaron rápidamente. El 18 de marzo, **los presidentes Tshisekedi y Kagame se reunieron en Doha** por primera vez en tres años y emitieron una declaración conjunta llamando a un alto el fuego inmediato. Este gesto facilitó el posterior diálogo entre la RDC y el M23 en Qatar, que culminó **el 24 de abril con el anuncio de una tregua**, aunque los combates continuaron sobre el terreno.

El 25 de abril, los ministros de Exteriores de ambos países firmaron en Washington una “declaración de principios” auspiciada por EEUU, en la que se comprometían a respetar la soberanía mutua y cesar el apoyo a grupos armados. **El acuerdo definitivo se ha alcanzado el 27 de junio en Washington**, con la presencia del secretario de Estado Marco Rubio y los ministros de Exteriores de RDC y Rwanda, Therese Kayikwamba Wagner y Olivier Nduhungirehe, respectivamente. El texto incluye el desarme e integración condicional de grupos armados, el retorno de desplazados y un mecanismo de seguridad conjunta. En concreto, el **acuerdo** establece que Kinshasa y Kigali pondrán en marcha un marco de integración económica en 90 días y formarán un mecanismo de coordinación de seguridad conjunta en el plazo de 30 días. Bajo estos términos, miles de soldados ruandeses se retirarán de la RDC en tres meses. Paralelamente, EEUU ha mostrado interés en invertir miles de millones de dólares en proyectos mineros y de infraestructura, en una región clave para los minerales estratégicos. El acuerdo

fue mediado por Massad Boulos, empresario libanés-estadounidense y suegro de Tiffany, hija de Trump, quien fue nombrado por el presidente asesor principal para África. La consecución del acuerdo, no exento de riesgos, es una remarcable oportunidad para poner fin al conflicto armado que padece el este de RDC y el conjunto de la región desde hace más de 3 décadas, siempre y cuando se tengan en cuenta las causas estructurales que se encuentran en la génesis de este conflicto, tal y como recoge el **informe Alerta 2025**.

Aunque Rwanda niega las acusaciones de apoyo al M23, Kigali ha exigido el fin de otro grupo armado en RDC, las FDLR, creado por los responsables del genocidio de Rwanda de 1994. Durante la firma, Rwanda insistió en un fin irreversible y verificable del apoyo de la RDC a las FDLR. El acuerdo exige la neutralización de las FDLR. A pesar del optimismo por la firma del acuerdo de paz, existe cierta confusión sobre el terreno por la ausencia de cualquier mención sobre la fecha de retirada de los rebeldes del M23. El acuerdo no aborda explícitamente los logros del M23, pero exige a Rwanda que ponga fin a las “medidas defensivas” que ha adoptado. Los rebeldes han estado nombrando gobernadores y controlando aeropuertos en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

En el plano militar, el M23 ha seguido avanzando en las provincias de Kivu Norte y Sur, tomando localidades como Lunyasenge o Luchiga. A pesar de las negociaciones, los enfrentamientos con las milicias pro-gubernamentales Wazalendo y otros grupos armados han continuado, agravando la crisis humanitaria que ya ha desplazado a más de siete millones de personas. Miles de personas han buscado refugio en los países vecinos, como Burundi, donde se enfrentan a una **grave reducción de la ayuda humanitaria, robos y abusos sexuales** en los campos de refugiados en ese país. La situación interna en la RDC también se ha visto sacudida por la reaparición del expresidente Joseph Kabila, acusado de vínculos con el M23, lo que ha aumentado la fragmentación política.

SUDÁN

Actores de la comunidad internacional tratan de reavivar las iniciativas de diálogo de paz

En medio del mantenimiento de la guerra en el país, durante el trimestre se registraron varias iniciativas de la comunidad internacional para tratar de poner fin a la guerra. El 15 de abril, Reino Unido, Francia, la Unión Africana y la Unión Europea reunieron a diplomáticos de países occidentales, árabes y africanos en Londres para buscar un esfuerzo unificado en las negociaciones de paz. Sin embargo, las divisiones entre los principales actores externos regionales, Egipto y Arabia Saudita –que respaldan al Ejército– y Emiratos Árabes Unidos –que respalda a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)–, bloqueó la firma de cualquier acuerdo. Posteriormente, EEUU y la ONU **informaron que están tratando de reactivar iniciativas**

diplomáticas separadas para poner fin a la guerra. Massad Boulos, asesor del presidente estadounidense Donald Trump en asuntos africanos, anunció que EEUU, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto se reunirán en Washington para revivir la iniciativa del “Cuarteto”. Este anuncio se produjo un día después de que la ONU informará de sus propios esfuerzos de mediación, organizando una reunión del Grupo Consultivo con la Unión Africana en Addis Abeba.

En el plano político, en el mes de mayo el Ejército nombró al civil, Kamil Idriss, nuevo primer ministro del país. La Unión Africana elogió el nombramiento del primer ministro civil como un “paso hacia una gobernanza inclusiva”. Sin embargo, la Alianza Democrática Civil “Somoud” (Resiliencia), un grupo prodemocrático liderado por el ex primer ministro Abdalla Hamdok, **anunció que no reconocerá al primer ministro designado por el Ejército y envió a las partes un plan de paz para poner fin al conflicto**. Posteriormente, el 19 de junio, Idriss anunció la formación de un gabinete de 22 miembros con el fin de consolidar el frente civil del Ejército y asegurar una mayor legitimidad internacional, en particular de la Unión Africana. Mientras tanto, los líderes de la otra coalición civil denominada “Tasees”, alineada con RSF, continuaron en junio las negociaciones para la formación de un gobierno rival.

De forma paralela, y en lo concerniente al plano militar, durante el trimestre el Ejército consolidó su control sobre la capital, Jartum, mientras que las RSF prosiguieron con

su ofensiva en Darfur en un intento por controlar toda la región, lo que podría significar la partición de facto del país. Asimismo, se intensificaron los combates en las regiones sureñas de Kordofán Sur y Nilo Azul; la guerra se extendió al extremo oriental del país por primera vez cuando las RSF atacaron Port Sudan, sede de facto del gobierno dirigido por los militares; y en junio, las RSF tomaron el control de la zona de la triple frontera con Libia y Egipto, asegurando un corredor de suministro directo. Este último evento provocó la **mediación del presidente egipcio**, Abdel Fattah al-Sisi, que se reunió en El Cairo, de forma separada, primero con el comandante libio Khalifa Haftar, y después con el líder del Ejército de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan. Sisi podría tratar de mediar en una reunión entre Burhan y Haftar para reducir las tensiones fronterizas, ya que el Ejército sudanés ha acusado a una milicia salafista leal al comandante libio Haftar de ayudar a las RSF en la operación.

La perpetuación de la violencia llevó a que la ONU volviera a denunciar el **creciente riesgo de genocidio en el país**, cuyos combates han matado a decenas de miles de personas y desplazado a 13 millones, desencadenando la peor crisis humanitaria del mundo. Virginia Gamba, subsecretaria general de la ONU y asesora especial interina del jefe de la ONU, António Guterres, para la prevención del genocidio denunció que “ambas partes han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, destacando que las RSF y las milicias armadas árabes aliadas “continúan llevando a cabo ataques por motivos étnicos contra los grupos zaghawa, masalit y fur”.

AMÉRICA

COLOMBIA: Comuneros del Sur hace entrega de armamento al Gobierno mientras aumenta la violencia política en el país

VENEZUELA – GUYANA: Se incrementa la tensión bilateral por la elección de representantes de la Guayana Esequiba en los comicios parlamentarios en Venezuela

COLOMBIA

Comuneros del Sur hace entrega de armamento al Gobierno mientras aumenta la violencia política en el país

El Gobierno colombiano y el grupo armado Comuneros del Sur, disidencia surgida del ELN en el marco de las negociaciones de paz con este grupo, **anuncian la entrega y destrucción de armamento**. Comuneros del Sur hizo entrega de 585 artefactos explosivos a la Consejería Comisionada de Paz, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA). Esta entrega, anunciada en paralelo a la firma de otros acuerdos entre el

Gobierno y la organización armada, allanaría el desarme y la desmovilización de los integrantes del grupo insurgente. Se trata de un grupo armado comparativamente pequeño, ya que estaría conformado por 100 combatientes, lo que limita el alcance de los acuerdos, unido a la aparición de otras disidencias en el territorio, como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), a quienes se vincula a Comuneros del Sur, si bien este grupo niega la relación. Esta es la primera entrega de armamento por parte de un grupo insurgente desde que se inició la política de Paz Total por parte del Ejecutivo encabezado por Gustavo Petro y se produjo nueve meses después de que se iniciara de manera formal el diálogo entre este grupo armado y el Gobierno colombiano. El material entregado incluía minas antipersonales, morteros, cilindros bomba y granadas. **En**

paralelo al anuncio de la entrega de armas, se proclamaron dos acuerdos entre el grupo armado y el Gobierno. El primero de ellos es relativo a la verdad, la memoria y las víctimas, que establece mecanismos de recuperación de la memoria colectiva, preservación de testimonios y de participación de las víctimas y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El segundo de los acuerdos aborda la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios del departamento de Nariño. El Gobierno también destacó otros logros obtenidos en el marco del desarrollo del diálogo de paz. Así, se habría dado comienzo a un proceso de desminado humanitario en tres zonas periféricas en Samaniego. También se destacó que se había llevado a cabo la capacitación de 10 integrantes de Comuneros del Sur por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) conformando el grupo conocido como “Buscadores de Comuneros”, cuyo objetivo sería contribuir a la documentación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En junio prosiguió el diálogo entre el Gobierno y el grupo armado después de que el Ejecutivo frenara la extradición a EEUU de Gabriel Yepes Mejía, H.H., comandante de ese grupo armado requerido por delitos de narcotráfico. El proceso de extradición se paralizó para dar continuidad al proceso de paz. En paralelo a los avances en las negociaciones se produjo el deterioro de la situación de violencia en el país con el intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido de derechas Centro Democrático, que fue tiroteado por un sicario –un menor de 14 años– en Bogotá mientras participaba en un acto de su campaña política el 8 de junio y que le dejó herido de gravedad. El presidente pidió que una comisión independiente de Naciones Unidas investigara el atentado, propuesta que fue rechazada por la fiscalía colombiana. Además, también se incrementaron las actividades de las organizaciones armadas Estado Mayor Central y Estado Mayor de los Bloques en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Guaviare, causando el confinamiento de miles de personas.

VENEZUELA – GUYANA

Se incrementa la tensión bilateral por la elección de representantes de la Guayana Esequiba en los comicios parlamentarios en Venezuela

Se incrementa la tensión entre ambos países después de que, en el marco de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, se eligiera por primera vez a ocho representantes a la Asamblea Nacional de la región del Esequibo –Guayana Esequiba, según denominación oficial de Caracas. De hecho, la misma noche electoral, el presidente Nicolás Maduro declaró ante sus partidarios que la Guayana Esequiba ya tenía gobernador --refiriéndose a Neil Villamizar, candidato del

gobernante PSUV--, al que se comprometió a brindar el apoyo y los recursos necesarios para la recuperación de la región en disputa –de 160.000 km², bajo soberanía formal de Guyana pero reivindicada históricamente por Venezuela. Además, Maduro también declaró que, tras el resultado de los comicios, el presidente de Guyana, Ali Arfaan, tendría que sentarse con él “para discutir y aceptar la soberanía venezolana”. A pesar de tales declaraciones, algunos medios señalaron que la mencionada elección fue una ficción, puesto que se tuvo que crear una circunscripción electoral *ad hoc* –con 21.403 votantes– en un municipio del estado Bolívar, fronterizo con el Esequibo, de modo que no hubo colegios electorales en ninguna parte del Esequibo bajo soberanía de Guyana. Según dichas voces, a dicha circunscripción electoral de tan reducido tamaño se le asignaron ocho representantes a la Asamblea Nacional, más que algunos territorios con más población.

Por su parte, el Gobierno de Guyana no reconoció tales comicios y, de hecho, había advertido a cualquiera de sus ciudadanos que participara en los mismos que sería acusado de traición, apoyo a un golpe de Estado y otros delitos graves. Ante las aproximadamente 100.000 personas de ascendencia venezolana que viven en Guyana, el Gobierno había señalado que la participación en las elecciones podría acarrear la detención y deportación. Georgetown también recordó que la celebración de los comicios contravenía las medidas cautelares provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia de diciembre de 2023 y nuevamente de mayo de 2025 por considerar que tal acción podría alterar el statu quo. Además, el Gobierno de Guyana denunció que a mediados de mayo se registraron tres ataques separados desde el lado venezolano contra soldados guyaneses que patrullaban el río fronterizo Cuyuní, principal arteria fluvial utilizada por los mineros ilegales y zona rica en oro y petróleo. Tras los incidentes, Venezuela los catalogó como operaciones de bandera falsa. A principios de año, seis soldados guyaneses resultaron heridos en otro ataque.

La tensión acerca del histórico contencioso sobre el Esequibo se incrementó desde el referéndum que organizó Caracas en diciembre de 2023 y, posteriormente, con la aprobación en marzo de 2024 de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Algunas voces críticas consideran que ambos hechos, así como la inclusión de la Guayana Esequiba en los comicios de finales de marzo, tienen el objetivo de fortalecer la legitimidad del Gobierno de Maduro entre la población y también de forzar a Guyana a negociar bilateralmente sobre el asunto. En este sentido, en mayo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió que Guyana solo tiene la opción de negociar en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1996. Como en previas ocasiones, el Gobierno de Guyana negó cualquier negociación bilateral sobre el contencioso y recordó que la competencia y legitimidad para la resolución de la disputa corresponde a la Corte Internacional de Justicia.

ASIA Y EL PACÍFICO

INDIA – PAKISTÁN: Ambos países se sitúan al borde de un conflicto armado a gran escala

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Se incrementa la violencia por parte del Ejército y el grupo armado OPM

INDIA – PAKISTÁN

Ambos países se sitúan al borde de un conflicto armado a gran escala

India y Pakistán se situaron al borde de un conflicto armado a gran escala, después de un **atentado del grupo armado The Resistance Front en Cachemira el 22 abril**. 26 hombres murieron víctimas de un tiroteo en la localidad turística cachemir de Pahalgam, en su práctica totalidad turistas hindúes procedentes de otras zonas de la India. The Resistance Front –ramificación del grupo armado Lashkar-e-Taiba y surgido en 2019 tras la pérdida de Jammu y Cachemira de su condición de estado–, reivindicó el atentado a través de un mensaje de Telegram aunque posteriormente negó su responsabilidad en el atentado en un comunicado en su página web. El Gobierno indio respondió inicialmente al atentado con medidas diplomáticas como la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo, la expulsión de diplomáticos de Pakistán y la orden de abandono del país en un plazo de 48 horas para visitantes pakistaníes con determinados visados, además del cierre del cruce fronterizo terrestre de Wagah y la paralización del comercio entre los dos países. Pakistán replicó varias de las medidas y cerró su espacio aéreo a la India, medida imitada por el Ejecutivo indio. También tuvo lugar un intercambio de disparos en diferentes zonas de la Línea de Control, frontera de facto que separa a ambos países.

En un contexto de escalada diplomática y retórica y de creciente preocupación internacional por el incremento de la tensión entre dos potencias nucleares, India dio comienzo a la **operación militar Sindoore** el 7 de mayo, con ataques aéreos contra nueve emplazamientos en Pakistán señalados como cuarteles de los grupos armados Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba. Pakistán consideró estos ataques como un acto de guerra y señaló que 31 personas habían muerto, incluyendo mujeres y menores y en respuesta señaló que había neutralizado varios aviones de combate en el estado indio de Punjab y se difundieron en redes sociales informaciones sobre ataques con drones pakistaníes en varias ciudades indias. **India señaló que su acción militar en respuesta al atentado de Pahalgam se hallaba plenamente amparada por Naciones Unidas, en referencia a la declaración emitida por el Consejo de Seguridad sobre el atentado del 22 de abril.**

El conflicto escaló considerablemente e India llevó a cabo nuevas acciones aéreas contra instalaciones militares pakistaníes, incluyendo la ciudad de Rawalpindi, situada a 15km de la capital Islamabad y sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas de Pakistán y del aeropuerto de uso militar. Entre los objetivos estaba la base aérea de Nur Khan

en esta ciudad, situada en las inmediaciones del cuartel general de la División de Planes Estratégicos de Pakistán, que supervisa y protege el arsenal nuclear pakistaní, si bien las cabezas nucleares están repartidas en diferentes lugares del país. India señaló que se trataba de acciones en respuesta a ataques pakistaníes. El 10 de mayo el Gobierno pakistaní inició la Operación Buryan ul Marsoos, atacando varias instalaciones militares indias, como el propio Gobierno indio reconoció a posteriori. Como consecuencia de la violencia durante los días que duró el conflicto, India señaló que habían muerto 21 civiles y cinco militares, y Pakistán afirmó que 40 civiles y 11 militares habían muerto.

La escalada de la violencia y el riesgo para el arsenal nuclear pakistaní llevó a múltiples llamamientos diplomáticos por diferentes Gobiernos requiriendo a las partes un alto el fuego, especialmente por parte de EEUU. Si bien el vicepresidente de EEUU, JD Vance, había descartado previamente involucrarse en la crisis, el riesgo nuclear impulsó un cambio de posición diplomática. El 10 de mayo ambas partes anunciaban un **alto el fuego con efecto inmediato**. Poco antes del anuncio por parte de los Gobiernos indio y pakistaní, el presidente de EEUU, Donald Trump, había informado en su red social Truth el acuerdo de alto el fuego, si bien ni India ni Pakistán hicieron ninguna referencia a la administración estadounidense al proclamar públicamente el acuerdo. El anuncio oficial del Departamento de Estado de EEUU señaló que se trataba de un alto el fuego facilitado por EEUU. Desde el inicio del conflicto varios Gobiernos, entre ellos los de EEUU, Arabia Saudita, Irán y Turquía, habían mantenido conversaciones con representantes indios y pakistaníes para tratar de desescalar la tensión.

Esta tensión fue la de mayor intensidad desde el conflicto armado en 1999 y tenía lugar tras años de desescalada de la violencia, aunque en 2019 también se produjo una grave crisis, con episodios de violencia. Desde entonces, el Gobierno indio cambió su aproximación a la situación de Cachemira, transformando su estatus administrativo para reducir las cotas de autonomía del entonces estado indio, dividiéndolo en dos territorios de la unión: Jammu y Cachemira y Ladakh. La violencia en la Cachemira administrada por la India había disminuido considerablemente e incluso el Gobierno indio había dado prácticamente por finalizado el conflicto. Sin embargo, el conflicto de 2025 ha evidenciado el riesgo de confrontación abierta a gran escala, con una respuesta militar de mayor intensidad a lo que se unió el peligro de que armas e instalaciones nucleares se incorporaran a la ecuación, hasta el punto de que motivó a diferentes actores internacionales a jugar un papel más relevante y asertivo, especialmente EEUU, que previamente había optado por mantenerse al margen de la crisis.

A pesar de los enormes riesgos y de la mayor escalada en la confrontación entre India y Pakistán, finalmente se logró acordar un alto el fuego que se ha mantenido, incluso con acusaciones mutuas de violaciones. Los canales de comunicación entre autoridades militares y asesores de seguridad de ambos países han permanecido abiertos, aunque no ha trascendido públicamente que el diálogo haya avanzado más allá de las cuestiones relativas al alto el fuego. El reequilibrio de alianzas en la región en un contexto de pugna geopolítica entre EEUU y China ha generado también un nuevo escenario en la región que se une a años de tensión de elevada intensidad entre China e India por las disputas fronterizas que les ha enfrentado y el acercamiento chino a Pakistán –parte del armamento usado para responder los ataques indios por Pakistán era chino–, dotando a la crisis entre India y Pakistán de una mayor complejidad.

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL)

Se incrementa la violencia por parte del Ejército y el grupo armado OPM

Varias organizaciones de derechos humanos advierten sobre un notable incremento de la violencia en determinadas regiones de Papúa Occidental desde el mes de abril. El 10 de abril, un portavoz del OPM reivindicó el **asesinato de más de 17 personas** durante cuatro días, acusándolos de ser soldados disfrazados de mineros de oro. El Gobierno de Indonesia desmintió que los mineros ilegales asesinados fueran soldados –denunciando que tal afirmación era pura propaganda por parte del OPM– y denunció que tal ataque era uno de los más mortíferos de los últimos años desde que, a finales de 2018, el OPM asesinara a 21 trabajadores de la construcción de carreteras en la región de Nduga. Por su parte, a mediados de abril el OPM denunció que **el Gobierno había desplegado a más de 6.000 efectivos militares** en la región desde enero y advirtió su disposición a librar una guerra “hasta el fin del mundo” si Yakarta no reconocía los derechos soberanos del pueblo papú. Más adelante, a mediados de mayo, **18 miembros del OPM y dos soldados murieron** en enfrentamientos durante dos días consecutivos en la regencia de Intan Jaya (provincia de Papúa Central), en los que unas 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. El OPM denunció que la gran mayoría de las personas fallecidas eran civiles y acusó al Ejército de disparar indiscriminadamente contra mujeres y menores. Un pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica

de la Tierra de Papúa afirmó que entre los 18 cadáveres había al menos tres civiles, por lo que grupos de derechos humanos y religiosos pidieron una investigación sobre las muertes de civiles. El Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental declaró que el Ejército había **atacado con drones y ataques aéreos siete aldeas** en Ilaga (regencia de Puncak), provocando el desplazamiento de numerosas personas. Además de estos dos episodios de violencia en abril y mayo, que tuvieron notable impacto político y mediático, en los meses de abril, mayo y junio siguieron registrándose enfrentamientos de manera regular entre las Fuerzas Armadas y el OPM, así como acusaciones cruzadas sobre ataques a población civil. Previamente, en los primeros meses del año, varias organizaciones habían advertido sobre un incremento de la violencia en la región. A modo de ejemplo, la **Fundación para la Justicia y la Integridad Humana de Papúa** (YKKMP, por sus siglas en indonesio) declaró que entre enero y abril unas 40 personas habían muerto en unos 20 episodios de violencia, que provocaron el desplazamiento forzoso de cientos de personas. Organizaciones de derechos humanos como **Human Rights Watch** señalaron que la población indígena es la principal damnificada por la **escalada de la violencia** en los últimos meses e instó a ambas partes a respetar el derecho internacional humanitario.

En cuanto a la dimensión humanitaria del conflicto, el centro Human Rights Monitor (HRM) señaló a mediados de junio que en tal fecha había **casi 97.700 personas desplazadas forzosamente** en Papúa Occidental como consecuencia de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el OPM. HRM declaró que se habían producido nuevos desplazamientos en las regencias de Jayawijaya, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak y Nduga y advirtió que dos distritos enteros –Sinak en la regencia de Puncak y Hitadipa en la de Intan Jaya–, estaban completamente deshabitados, y que todos sus residentes habían huido debido a los continuos enfrentamientos armados y las incursiones militares. El Gobierno también declaró tener información de que aproximadamente 60.000 personas de las regencias de Intan Jaya y Puncak Jaya habían huido a zonas urbanas. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAS, en indonesio) propuso formalmente que el Gobierno declare el estado de desastre social en Papúa Occidental, lo que posibilitaría una respuesta coordinada entre distintos ministerios y agencias gubernamentales en materia de asistencia social, atención médica, restauración de la educación o reconstrucción de las infraestructuras.

RUSIA – UCRANIA

Moscú intensifica su ofensiva militar

Se agrava la invasión rusa y conflicto armado Rusia-Ucrania, con graves impactos en seguridad humana. En el periodo entre el 1 de diciembre de 2024 y hasta el 31 de mayo de 2025, se produjo un **incremento de víctimas civiles del 37%** con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU). 968 civiles murieron –incluyendo 24 niños y 18 niñas– y otros 4.807 resultaron heridos –de los cuales 143 eran niños y 119 niñas. De ese periodo, abril fue el mes más mortífero, con 221 víctimas mortales civiles (y 1.168 heridos), seguido de mayo, con 183 fallecidos civiles (y 836 heridos). En esos seis meses, el 95% de las víctimas se produjeron territorio de Ucrania bajo control de su Gobierno, y la mayoría se debieron a ofensivas militares rusas para tomar territorio en los diversos frentes de guerra, al uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas en diferentes áreas del país y a un aumento del uso de drones de combate de corto alcance, según la ONU.

En los últimos meses y semanas Moscú ha intensificado su ofensiva terrestre en el principal frente de guerra, el de la provincia de Donetsk, así como en los frentes norte, noreste y sur (provincias de Sumi, Járkov, y Zaporíya y Jersón), con toma de territorio. Según los datos del Institute for the Study of War, en junio el empuje militar de Rusia **se intensificó por tercer mes consecutivo** y fue el mes en que ocupó más territorio desde noviembre de 2024 (588 km² –de los que dos terceras partes eran de la provincia de Donetsk–, frente a 240 km² en marzo). Por otra parte, el gobernador de la provincia de **Lugansk bajo ocupación rusa** afirmó que Rusia había tomado el control de toda esa región. Rusia intensificó también sus ataques aéreos contra Ucrania, con graves impactos en civiles e infraestructura. Entre otros hechos más mortíferos, un ataque de Rusia con misil el 4 de abril en Krivói Rog (región de Dnipropetrovsk) mató a 20 civiles, incluyendo 9 menores e hirió a 63 civiles, 11 de cuales eran niños y niñas. Fue el **ataque con más víctimas mortales menores** desde el inicio de la invasión hasta esa fecha. Un ataque el 13 de abril con dos misiles balísticos consecutivos contra la localidad de Sumi causó la muerte de 31 civiles y heridas a otros 105. **Entre el 23 y 26 de mayo**, Moscú lanzó la mayor ofensiva de drones hasta entonces desde el inicio de la invasión, con víctimas civiles y daños en infraestructura civil en 16 regiones. Los ataques aéreos contra la capital, Kyiv, se incrementaron desde mediados de mayo, según ACLED. **Un ataque masivo de Rusia con drones y misiles el 17 de junio** causó al menos 28 víctimas mortales civiles y 140 heridos en la capital, en el ataque más mortífero contra la ciudad en un año. El ataque alcanzó a otras 30 localidades de la región de

Kyiv. Otro ataque ruso el 24 de junio, con cuatro misiles Iskander, mató a al menos **21 civiles** e hirió a unos 300, en la ciudad de Dnipro.

Por su parte, entre los ataques de Ucrania contra territorio de Rusia, **Ucrania lanzó un ataque masivo** el 1 de junio con 117 drones contra múltiples aeronaves militares en aeródromos en las regiones rusas de Briansk, Riazán, Ivanovo, Múrmansk, Irkutsk y Amur. En junio ACLED informó de **explosiones contra infraestructura ferroviaria** tanto en Rusia como en territorio ucraniano ocupado por Rusia, incluyendo una explosión en un puente al paso de un tren, que mató a siete civiles e hirió a otros 127 en la región de **Briansk el 31 de mayo**. Por otra parte, EEUU anunció a principios de julio **la suspensión del envío** de diversas tipologías de armamento considerado clave por Ucrania y comprometidas por la Administración del presidente anterior, Joe Biden.

Mientras se ha intensificado la dinámica bélica en los últimos meses, las negociaciones de paz siguen estancadas. No fructificaron los **pactos del 25 de marzo** sobre altos el fuego en el ámbito de infraestructuras energéticas y en el Mar Negro, anunciados en comunicados diferentes de EEUU (uno relativo a Rusia y otro a Ucrania), de Rusia y de Ucrania, tras tres días (23-25 de marzo) de negociaciones por separado en Arabia Saudita, con mediación de EEUU. Ambas partes se acusaron de incumplimiento. En todo caso, el presidente ucraniano señaló a mitad de abril que Rusia había reducido sus ataques contra infraestructura energética, pero que en cambio había **redirigido los objetivos de los ataques** hacia infraestructura civil. Ucrania reclamó a Rusia la adhesión a la propuesta de EEUU de alto el fuego de 30 días en tierra, mar y aire, a la que Kyiv dio apoyo en marzo. Rusia anunció el 19 de abril un alto el fuego de 30 horas coincidiendo con la semana santa. En abril se difundió un borrador de propuesta de **plan de paz de EEUU** que incluía puntos como el reconocimiento legal de la anexión de Crimea y aceptación del territorio controlado por Rusia desde 2022, en contraste con la posición de Ucrania de no reconocimiento legal y de postergar las cuestiones territoriales hasta después de un alto el fuego. Ucrania y países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania) expresaron sus desacuerdos en reunión en Londres con representantes de EEUU a finales de abril.

En un contexto de desconfianza elevada entre las partes y acusaciones cruzadas, delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron en **Estambul el 16 de mayo** y lograron acuerdo concreto solo en el ámbito humanitario, con un pacto para un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra (2.000 presos, mil de cada parte). También pactaron compartir por escrito sus posiciones respecto a las condiciones para un alto el fuego y se comprometieron a reunirse de nuevo. Las partes mantuvieron otro encuentro el 2 de junio en la capital turca. En esa cita, **acordaron intercambiar** todos los prisioneros con enfermedades o

heridas de gravedad, así como los soldados presos menores de 25 años, y el retorno de 10 menores ucranianos (de una lista de 400). Con relación a un alto el fuego, continuaron los desacuerdos de peso. Rusia ofreció una tregua de 2-3 días en solo algunas áreas en la línea del frente para recuperar cuerpos de soldados fallecidos y **rechazó la propuesta de paz de EEUU** de 22 puntos, cuyo primer punto era un alto el fuego amplio. En esa ronda **Moscú presentó su memorándum**, difundido por medios rusos, en el que reclama reconocimiento legal internacional

de las regiones anexionadas (Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporíyia, que no controla actualmente en su totalidad), retirada total de fuerzas ucranianas de estas áreas, neutralidad (respecto a OTAN), límites a tamaño, armamento y equipamiento del Ejército ucraniano. Ucrania también presentó su memorándum, en términos antagónicos a los de Moscú. Por otra parte, el presidente de EEUU dejó entrever la posibilidad de cesar su papel de apoyo a la búsqueda de una solución.

ORIENTE MEDIO

ISRAEL-PALESTINA: Nuevas perspectivas de alto el fuego en Gaza, mientras se agravan crímenes de Israel en la Franja

YEMEN: Reapertura de carreteras clave tras años de bloqueo en las negociaciones

ISRAEL-PALESTINA

Nuevas perspectivas de alto el fuego en Gaza, mientras se agravan crímenes de Israel en la Franja

A comienzos de julio volvían a abrirse perspectivas de un eventual alto el fuego en Gaza en torno a una nueva propuesta presentada por EEUU a través de su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. La iniciativa contempla un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de personas, vivas y muertas, retenidas por Hamas desde los ataques del 7 de octubre. Según informaciones trascendidas a la prensa, Qatar y Egipto –países mediadores– habían diseñado un mecanismo de liberación escalonada. No estaba claro el número de palestinos y palestinas encarcelados por Israel que serían puestos en libertad en el marco del intercambio. **El grupo palestino valoró positivamente la propuesta** y mostró su disponibilidad a negociar los términos del acuerdo, insistiendo en sus demandas previas, como una tregua permanente y el acceso de ayuda. No estaba claro, sin embargo, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estuviera dispuesto a un alto el fuego más allá de dos meses. Y se mantenían las incógnitas sobre las condiciones de la tregua que podría pactar durante su visita a Washington, en la que volvió a exhibir su sintonía con Donald Trump. Su viaje a EEUU estuvo precedido de declaraciones de miembros del gobierno israelí sobre un **plan para reubicar a la población gazatí en un campo en la ciudad de Rafah**, en una propuesta que personas expertas calificaron como un ejemplo de crimen contra la humanidad.

Las expectativas sobre un nuevo alto el fuego –que sería el tercero, tras la breve tregua de noviembre de 2023 y la que estuvo vigente entre enero y marzo de 2025, cuando Israel abandonó los términos del acuerdo y reanudó su ofensiva– se producen en un contexto de alarma por el

grave deterioro de la situación en Gaza (y también en Cisjordania). Según los balances más actualizados, como mínimo unos 60.000 palestinos y palestinas han muerto a causa de la campaña militar israelí en la Franja. En un contexto de bloqueo y gravísimas carencias, en las últimas semanas muchas de las muertes se han producido durante los intentos de la población gazatí de acceder a alimentos. Ello, como consecuencia del sistema de reparto organizado por Israel en colaboración con EEUU a través de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). Aunque Israel ha intentado presentarla como una iniciativa “humanitaria”, numerosas voces han denunciado el sistema como degradante, inefectivo y contrario a todos los principios de la acción humanitaria. En tan solo un mes (entre el 27 de mayo y 27 de junio) más de 600 personas habían muerto en ataques e incidentes producidos mientras esperaban recibir una ayuda indispensable para su supervivencia. Diversos medios de prensa han alertado que Israel ha dado órdenes a sus militares para disparar a palestinos desarmados que intentaban alcanzar puntos de reparto de ayuda.

Pese a las crecientes denuncias sobre los crímenes de Israel en Gaza y la intensificación de la violencia contra la población palestina en Cisjordania, el clima de impunidad persistió y actores internacionales **no activaron mecanismos de sanciones significativos** durante el trimestre. En el marco de la revisión de su acuerdo de asociación con Israel, la Unión Europea publicó en junio un informe en el que **reconoce “indicios” de incumplimiento por parte de Israel** de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pese a ello, no se pusieron en marcha medidas sancionadoras contra Israel ni se planteó una suspensión del acuerdo de asociación, como exigen diversos actores que denuncian el genocidio en Palestina. En este contexto, a finales de junio se hizo público un nuevo informe de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, que expuso las **complicidades económicas de numerosas empresas en el genocidio y la perpetuación de**

la ocupación y el apartheid en Palestina. En su reporte, Francesca Albanese denunció cómo las compañías se lucran con estas prácticas y cómo esta dinámica dificulta frenar el genocidio en Palestina. El informe de la relatora documenta y señala a 48 empresas de diversos países y sectores económicos, que constituyen una muestra, no una lista exhaustiva de todos los actores implicados. Entre las compañías señaladas se cuentan la estadounidense Lockheed Martin, la italiana Leonardo o la empresa de transporte marítimo Maersk (sector militar); Amazon, IBM o Microsoft (sector tecnológico), Caterpillar (suministrador clave en equipos para demoliciones) y la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que trabaja en los asentamientos ilegales y en el Tren Ligero de Jerusalén. El informe de la relatora busca facilitar las acciones de rendición de cuentas a nivel internacional, donde continuaron registrándose acciones de presión protagonizadas por la sociedad civil. Durante el trimestre, algunas de las iniciativas de mayor repercusión mediática fueron la flotilla y la marcha hacia Gaza, bloqueadas por Israel y países del entorno, como Egipto.

YEMEN

Reapertura de carreteras clave tras años de bloqueo en las negociaciones

El bloqueo de carreteras que conectan áreas bajo control del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y áreas bajo dominio de los al-houhtistas es una de las consecuencias del conflicto armado en el país y uno de los temas objeto de negociación que se había visto afectado por años de bloqueo en el diálogo. Sin embargo, y en buena parte gracias a los esfuerzos locales de mediación, varias de estas vías fueron reabiertas al tránsito entre finales de

mayo y principios de junio. Entre ellas las que conectan las provincias de Marib y al-Bayda y la carretera entre Abyan y al-Bayda. Después de estar cerrada siete años (desde 2018), también se reabrió la carretera de Al-Dhalea, la ruta principal entre la capital yemení, Sanaa (bajo control houthi), y Adén, en el sur (bajo control del gobierno internacionalmente reconocido). En este contexto, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, valoró especialmente la reapertura de esta vía por su previsible impacto en la reducción de los tiempos de viaje de la población y la circulación de bienes. El diplomático subrayó que esta medida demuestra los acuerdos que son posibles de alcanzar a través del diálogo y puso en valor el papel desempeñado por los actores locales que facilitaron el acuerdo. Además, Grundberg hizo un llamamiento a las partes en conflicto a alcanzar más compromisos y medidas de confianza y a priorizar las necesidades de la población civil. Análisis apuntaron a que la reapertura de carreteras también se habría visto favorecida por la necesidad de los al-houthistas de aliviar la crisis económica agravada por el cierre del puerto de Hodeida –convertido en inoperable en los últimos meses tras los ataques de Israel en el marco de su conflicto con los al-houthistas– y por las presiones de Arabia Saudita al gobierno internacionalmente reconocido. Tras la reapertura de la vía entre Sanaa y Adén, los al-houthistas también se mostraron dispuestos a reabrir la carretera principal que conecta Adén con Taiz (centro), clausurada desde hace 10 años. A mediados de junio, en su informe sobre la situación en el país ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el enviado especial de la ONU para Yemen insistió en que el escenario regional y el cese de hostilidades en el Mar Rojo son determinantes para el futuro del país. Sin embargo, también subrayó que la paz en Yemen equivale a mucho más que la contención de una amenaza e implica poner en el centro a la población, que viene padeciendo los impactos de años de violencia y crisis humanitaria agudizada por el conflicto armado.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.